



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Mar del Plata, 22 de agosto de 2024.-

### Y VISTA:

La presente causa N° FMP 34579/2015/1/CA1 proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 1 de esta ciudad de Mar del Plata, Secretaría Penal Nro. 4, caratulada: "Legajo de Apelación (en autos: G., M. R. por Infracción art. 303 del C.P)", de trámite por ante la Secretaría Penal de esta Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata;

### Y CONSIDERANDO:

**El Dr. Eduardo P. Jiménez dijo:**

Que viene el presente a estudio de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del sindicado M. R. G. contra el interlocutorio de fecha 08/03/20... mediante el cual se dispuso decretar el procesamiento sin prisión preventiva del nombrado como autor "*prima facie*" del delito de Lavado de Activos agravado por la habitualidad, previsto y penado por el art. 303 del CP, inc.1 e inc. 2 a) del CP (conf. Arts. 306 y 310 del CPPN) y mandar a trabar embargo sobre los bienes y/o dinero del nombrado, hasta cubrir la suma de \$ 8.3..0. (art. 518 segundo párrafo del CPPN), entre otras medidas cautelares.

### Los hechos. La resolución recurrida.-

A los fines de lograr una mejor claridad expositiva, comenzaré por decir que la presente tiene su génesis en la denuncia efectuada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en fecha 21/1./20., a raíz del Reporte de Operación Sospechosa nro. 6.. informado a la Unidad de Información Financiera (UIF) el día 16/09/2. por el banco "S.r R. SA".

La entidad bancaria, al reseñar la operatoria que fundaba sus sospechas, refirió que el cliente M. R. G., quien se dedicaría a la venta minorista de carne, habría realizado depósitos en efectivo por un total de \$1.2..1. durante



el período comprendido entre el 1/02/2. al 23/06/2.0., lo cual no se condecía con su documentación respaldatoria.

Además, puso en conocimiento que el padre de aquel, R. G., quien también resultaba ser empresario de la carne, había estado involucrado en una causa judicial por presunta asociación ilícita, defraudación al Estado, falsificación de documento público y evasión impositiva por un monto total de \$8...0..0..

En base a esa información, la UIF compulsó y analizó la documentación aportada por el sujeto reportante, ordenando diferentes medidas a los fines de obtener una información más detallada sobre el sujeto informado. Así, se analizaron las actividades que había declarado ante la AFIP, las declaraciones juradas que habría presentado ante ese organismo, los bienes que constaban a su nombre y las sociedades a las que podría pertenecer, entre muchas otras circunstancias estudiadas.

Conformada la instrucción, delimitado el objeto procesal y ordenadas medidas probatorias, el juez construyó la imputación sobre la que finalmente convocó a M.R. G. a audiencia indagatoria -quien hizo uso de su derecho a guardar silencio- por haber realizado maniobras de lavado de activos tendientes a introducir y poner en el mercado formal fondos de origen ilícito, así como también la adquisición de bienes muebles e inmuebles con dinero que en principio no sería posible determinar su origen, respecto de los cuales su administración fue sostenida en el tiempo.

Puntualmente, se le atribuyeron los siguientes hechos:

**Hecho 1:** Haber introducido dinero ilícito mediante el depósito en efectivo en la cuenta del B.R. a nombre de M. G.(depósitos durante los meses de febrero a junio del año 20. por un total de \$1.2.1., por un monto total anual aproximado de \$1.7..0.);

**Hecho 2:** Haber introducido dinero ilícito mediante el depósito en efectivo o acreditaciones en la cuenta corriente del Banco G. perteneciente a M. G. (durante el año 2. por la suma de \$ 4.5.4.);

**Hecho 3:** Adquirir moneda extranjera en el periodo 20.-20., por un monto total de \$1..5. (específicamente en el año 20. habría adquirido moneda extranjera por un monto total de \$3.1., año 20.por un monto total de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

\$5..29.año 2012 por un monto total de \$19.7. y año 20. por un monto total de \$42.4.);

**Hecho 4:** Consistente en la adquisición de automotores y moto vehículos, 1) B. modelo 1. G.210 Adquirido 0km. Fecha de adquisición 26/02 /20.. Valor \$ 1..503; 2) T.C.G.-9.: Adquirido 0km. Fecha de adquisición 24/04 /2. Valor \$ 7.2.; 3) F.F. NEG-2.: Adquirido 0km. Fecha de adquisición 8/11/20.. Valor \$ 1..000; 4) F.E. O.9.patentada por "S. SA", fecha de adquisición 10/12/2. Valor \$ 1..000; 5) B. modelo X. I. 242: Adquirido 0km. Fecha de adquisición 23 /03/2010. Valor \$ 516.000; 6) BMW GS800 (moto vehículo) dominio2.-J.: Adquirido 0km. Fecha de adquisición 1/07/2013. Valor \$1..000; 7) B.K.: Adquirido 0km. Fecha de adquisición 20/03/2012. Valor \$ 2.....000; y

**Hecho 5:** Adquirir con dinero en efectivo un inmueble al pozo sito en calle A.Nº 4. de esta ciudad por el valor de u\$s 1..5. cuyo importe fue pactado en oportunidad de la firma del boleto de compraventa de fecha 15/02 /2.. En el boleto de compraventa se pactó la forma de pago del siguiente modo, u\$s 50.3.al momento de la firma del boleto, u\$s 29.6.en 1.... cuotas consecutivas y mensuales de u\$s 2.....venciendo la primera de ellas el 15 de m.de 2. y el saldo al momento de entregarse la posesión en el año 20. Cabe señalar que Guerra escrituró la unidad funcional en el año 2..

Analizadas las constancias de la causa, el Dr. Inchausti sopesó como elementos de cargo que los ingresos declarados del imputado durante el período 2.-2. habían sido 0 (cero), a la vez que desde el año 20. en adelante no registraría presentaciones de declaraciones juradas del IVA ante el organismo recaudador. De tal modo, advirtió que G. había figurado como inscripto ante el Fisco en el rubro "servicios de publicidad", dándose de alta en enero del 2..... y baja en oc...2..0., aunque en noviembre de... 2.se dió nuevamente de alta. Con anterioridad (marzo de 1..9.), había figurado inscripto como prestador de servicios N... que incluye actividades de astrología y espiritismo, agencias matrimoniales, contratación de acompañantes, actividad de lustrabotas, acomodadores de autos, etc., sin número de baja.

Asimismo, valoró que en sus presentaciones 20. a 20., G. sólo declaró ingresos exentos por *"intereses originados en depósitos en cajas de ahorro, cuentas especiales de ahorro, plazo fijo, otros"*, por venta de rodados, por venta de



moneda extranjera (surgiendo del informe del BCRA que el encartado sólo efectuó operaciones de compra) y otras ganancias y/o ingresos exentos o no gravados con el detalle de “dinero por convivencia familiar”.

En cuanto a los **vínculos con el delito previo originador de las ganancias** que luego habrían sido blanqueadas, el juez tuvo presente la condena impuesta por el T. N° 2 de C. en el año 2. al padre del imputado, R.G., por el delito de asociación ilícita fiscal, tratándose de maniobras de años anteriores a las arriba detalladas y que habrían sido sostenidas en el tiempo por el imputado M. G. quien no pudo justificar el origen lícito del dinero de los hechos enrostrados en el marco de esta investigación.

En tal silogismo, el Dr. Inchasuti consideró determinante la relación comercial y la confusión de patrimonios entre padre/hijo, y en lo que hace al “Hecho 1”, lo aportado por el banco “S. R.” en cuanto a que dentro de los productos contratados por M. G. figuraba un adicional a nombre de V. P., quien registraba un DNI cuyo número de cartilla coincidía con el de su padre.

Además, el juez menciona que varios de los vehículos adquiridos por el imputado registran cédula azul expedida en favor de R. G., a lo que agrega respecto de las acreditaciones bancarias realizadas en el año 2., que el propio imputado reconoció haber facilitado su cuenta para el giro comercial de la empresa “G. M. SA” que le correspondía a su padre junto con C. A. R..

De igual forma, remarcó que M. G. y su hermana V. constituyeron la sociedad mediante la cual opera la firma “S.S.A.” desde. 1..., época en la cual se comenzaron a sustanciar los procesos penales contra el padre de ambos, conforme surge de las constancias de la causa FMP 69./20., por lo que asumió que el verdadero responsable de esa firma resultaba ser el progenitor de M. G., siendo que los montos cuyo lavado se le imputan, provendrían de la actividad comercial por la que su padre resultó condenado.

También concluyó que M. G. había intervenido en el lavado de activos provenientes del narcotráfico a través de operaciones bancarias de descuento de cheques a L. I. e I. L., vinculados a la estructura criminal montada





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

por S. "C." S.. Así, consideró que entre los años 20. a 20., de manera sostenida y constante, cobró cheques y giró dinero relacionado a esa estructura narco criminal.

Así, en función de la prueba analizada, al momento de efectuar la subsunción típica de los hechos, el juez realiza un análisis del tipo penal contenido en el art. 303 del CP, sosteniendo la vigencia de la acción penal conforme el criterio sentado por la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa 21./20. en donde aquel tribunal expresó que el lavado de activos es un delito continuado por lo cual el tiempo de prescripción empieza a correr desde el último acto consumativo, haciendo suyo tal razonamiento.

Respecto de la habitualidad que se imputa como agravante, tuvo por acreditado que desde las cuentas bancarias de M. G.se efectuaron movimientos de dinero y compra de moneda extranjera, así como también se detectaron transacciones con bienes registrables muebles e inmuebles individualizados, experimentando un incremento injustificado de su patrimonio, y en orden a los cinco hechos imputados, se hace evidente la habitualidad, pues su administración ha sido sostenida a lo largo de los años.

Para finalizar, concluyó que la configuración de los agravantes que contempla la figura del art. 303 en su inciso segundo, se verifican en el caso del imputado, pues las maniobras fueron acreditadas "con continuación" y sobre todo con "repetición de actos o por hábito y no en forma esporádica o excepcional" lo que se demuestra tanto por la continuidad y permanencia de ellos en el tiempo.

En esa inteligencia, con fundamento las probanzas colectadas por la instrucción, tuvo por comprobada *prima facie* la participación del encausado en grado de autor del delito de lavado de activos agravado por la habitualidad (art. 303 inc. 1 y 2 a) del CP).

#### **Los agravios de la parte recurrente.-**

La defensa técnica del encausado cuestiona que las conductas que se recriminan a su asistido no vulneran el bien jurídico que protege el art. 303 del CP, el cual está dado por el "Orden Económico y Financiero Nacional", sin que sea suficiente para configurar la conducta típica que un sujeto adquiera



bienes para su disfrute con ganancias irregulares –propias o de su padre-, situación que podría dar lugar a un supuesto de evasión impositiva, pero no de lavado de activos.

Por ello, sostiene que los hechos enrostrados a G. resultan atípicos en relación al art. 303 del CP; al no existir actuación coordinada de varias personas o sociedades, una apariencia de licitud, y mucho menos astucia para que se configuren los verbos típicos reclamados por la figura delictiva.

Asimismo, la defensa sostiene que no se puede apreciar ningún tipo de operación de colocación, confusión y/o integración de bienes, ya que G. compró y vendió, usando su nombre y por los canales legales, lo cual excluye por completo la tipicidad objetiva requerida por el tipo penal previsto en el art. 303 del CP, por lo cual plantea el sobreseimiento del encartado.

En cuanto a los vínculos con S. “C.” S. y su entorno, remarcó que su representado mantenía una relación de amistad con L. por tratarse de su chapista de confianza, remarcando que este último fue absuelto de la imputación que se le dirigió por infracción a la Ley 23.737. En cuanto a la conexión con I., se deduce de las cuatro conversaciones registradas entre éste y M. G., que el vínculo entre ellos se originó por intermedio de L., surgiendo del contenido de esas comunicaciones que tenían por finalidad coordinar el cambio / pago de un cheque que G. le había dado a L., y la circunstancia que I. se encuentre detenido a la espera de un proceso de extradición, de manera errónea resulta suficiente a criterio del Juez de grado como indicio que G. se dedicaba al lavado del dinero proveniente de la organización de “C. S..

Seguidamente, luego de fundar el recurso, la defensa introduce un nuevo agravio (como cuestión de orden público) postulando que la acción penal de los hechos anteriores al 3/11/20.. estaría prescripta, puesto que entre la fecha de comisión de los hechos y el primer acto interruptivo, esto es el llamado a indagatoria el 3/11/20., habría transcurrido el plazo de 1.... años establecidos como pena conforme el art. 62 del CP.

### **La réplica formulada por el Ministerio Público Fiscal.-**

Luego de describir los hechos y antecedentes de la causa, el Fiscal General consideró que el auto cuestionado debía ser confirmado pues, en





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

relación al ilícito precedente, reseñó que para la aplicación del tipo penal en cuestión no resultaba necesario que superara el plano indiciario, por lo cual la circunstancia de no haber recaído sentencia condenatoria en todas las investigaciones efectuadas respecto a delitos precedentes o la absolución de alguno de sus imputados (como el caso de L.), no provocaba la inexistencia de tal ilícito previo, sino que determinaba la facultad de invocarlo a los fines de tener por configurada una maniobra de lavado de activos.

Detalla que G. y su entorno fueron imputados, procesados y/o condenados por la comisión de diversas maniobras (conforme detalle de las causas CPE 990000166/2010/TO1 "G., R.; G., D.; E. R.; B., F., y F. O. M.s/ inf. Art. 210 CP"; FMP 320./2011 "R. C. y otro s/ Inf. Ley 24.769 Dte. AFIP-DGI"; FMP 69./2023 "N.N. y otros s/ Asociación ilícita fiscal Dte.: AFIP-DGI"; FMP 12./2012/TO1 "Sala, S. V. y Otros s/ Infracción Ley 23.737").

En cuanto a la vinculación con la causa FMP 1.../2..0., pese al cuestionamiento de la defensa en cuanto a que I. L. resultó absuelto, lo cierto es que su vinculación con S.y el resto de los condenados fue comprobada, mientras que L. I. continúa sujeto al proceso, por lo cual queda expuesta la vinculación de G. con activos provenientes de actividades ilícitas como evasiones fiscales, asociaciones ilícitas y el narcotráfico.

Por otro lado, destaca la ausencia de ingresos lícitos justificados en relación a los bienes que disponía y gastos que realizaba, destacando, asimismo, la participación de G. en diversas sociedades ("M.SA" (ex "S. S.A.") desde 19. y ocupando el cargo de Director Titular desde el 24/02/2.; "D. SRL" desde marzo de 20.; "La C. SA", en el cargo de presidente y "F. M. SA", en el cargo de presidente), vinculándose todas con el dinero ilícito y la confusión de patrimonios buscada por G.

Asimismo, subraya las constantes operaciones comerciales, como ser compraventa de rodados, adquisición de inmuebles, gastos suntuosos y confusión de patrimonios tendientes a dar apariencia lícita al dinero espurio.

En tal sentido, pese a los esfuerzos defensistas que se dirigen a sostener una presunta atipicidad de las acciones imputadas, se ha corroborado que, con el fin de brindar apariencia lícita al dinero mal habido, G.recurrió a una diversificación y estratificación de esos activos, mediante la compraventa y



administración de automóviles, algunos sin registrarlos a su nombre y otros para ser usados por terceras personas; también procuró la confusión de patrimonios con familiares y sociedades e inversiones en gastos suntuosos como múltiples viajes al exterior. En efecto, la actividad de G. cumplió con las tres fases del lavado, es decir, la colocación, estratificación e integración.

En cuanto a la compra venta de automóviles, el Dr. Adler concluye que la habitualidad de la maniobra y las grandes sumas de dinero que implicaban, dan cuenta que era una forma más de diversificación de la ganancia ilícita para luego darle apariencia de legalidad, cumpliendo así con la tercera fase del lavado, es decir, la integración.

En cuanto a la confusión de patrimonios, la evidencia reunida en el legajo permite asegurar que el patrimonio del padre del aquí imputado -condenado por el delito de asociación ilícita en el año 20.., e investigado en otras causas de evasión-, se encuentra estrechamente vinculado al de su hijo M., más allá de una simple relación de parentesco como expone la defensa.

Finalmente, destaca las inversiones en gastos suntuosos, como ser, viajes al exterior, compra de moneda extranjera, adquisición y administración de inmuebles, entre otros.

En cuanto al planteo de prescripción formulado por la defensa del sindicado, el Fiscal General sostiene que, a fin de salvaguardar el principio de doble instancia, el planteo debería haber sido introducido ante el Magistrado de grado, formándose el pertinente incidente de falta de acción por prescripción.

Sin perjuicio de ello, explica que en atención a que los hechos imputados han sido calificados *prima facie* como constitutivos del delito de lavado de activos agravado por ser cometido con habitualidad y que tuvieron lugar, al menos, desde el 15/02/20.. hasta la actualidad, mientras que fue convocado a prestar declaración indagatoria en fecha 3/11/20. (siendo éste un acto interruptivo de la prescripción), se observa claramente que no ha operado a su respecto el plazo necesario (12 años) para disponer la extinción de la acción penal (art 59, inc. 3, 62 inc. 2 y 67 del CP), pues la defensa omite valorar que estamos ante un delito continuado.

En efecto, si bien algunos bienes fueron adquiridos con anterioridad al 3/11/20., lo cierto es que permanecieron bajo su esfera de custodia





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

con posterioridad y hasta la actualidad, ejerciéndose actos de administración y cuidado sobre ellos, lo que implica la permanencia en el tiempo de la conducta prohibida, razón por la cual resulta improcedente el planteo de prescripción.

### La opinión del suscripto.-

Analizados los cuestionamiento esgrimidos por el recurrente y la réplica formulada por el Ministerio Público Fiscal, entiendo que el resolutorio recurrido debe ser revocado atento los siguientes fundamentos. Veamos.

En primer término habré de atender el planteo de atipicidad que efectúa la apelante, quien sostiene que las conductas que se imputan a su asistido, no han tenido la capacidad de afectar el bien jurídico protegido por la figura típica que se le endilga, ya que no se verifican “...actos subrepticios, con complejidad documental, todo lo que pueda burlar controles, y, de esa forma, eventualmente, afectar el orden económico y financiero”., conforme remarca el abogado defensor. Concluye la idea recordando que M.G.compró bienes a su nombre y por lo canales legales, sin que hubiera existido ningún tipo de operación de “colocación”, “confusión” y/o “integración”, por lo que correspondería dictar el sobreseimiento de su asistido.

Entonces habré de hacer una breve referencia al bien jurídico que ampara esta figura delictiva, existiendo en nuestra doctrina dos posturas al respecto, una que considera que solo protege al orden económico y financiero pues “...el legislador argentino individualiza como bienes jurídicos macrosociales de carácter funcional al orden económico y financiero, en la inteligencia de que se trata la del lavado de activos de una conducta que puede desestabilizarlos.” (Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado, Tomo III, Marcelo Riquert -Director-, pag. 2286); mientras que otro pensamiento doctrinario nos ubica ante “...un delito pluriofensivo, en tanto menoscaba simultáneamente a la administración de justicia, al orden socioeconómico, a la transparencia del sistema financiero o la legitimidad de la actividad económica, e incluso a la salud pública, como en los casos de narcotráfico (cfr. LLERENA, Patricia, "Lavado de dinero", Revista del Ministerio Público Fiscal, nro. 0, p. 39 y ss.).” CFed. Cas. Penal, sala 4ª, 05/12/2019, "V. P., S. S. y otros", c. nro. 2021/2014/TO1/CFC33).



En ese mismo sentido, también se ha dicho que *“El disvalor del lavado de dinero resulta de su aptitud para entorpecer el seguimiento del origen de los fondos producidos por el organigrama criminal, dificultando con ello el desentrañar su existencia. [...] [E]l lavado de dinero es un delito pluriofensivo, pues pone en riesgo diferentes bienes jurídicos o contenidos legítimos (entre los que [Córdoba] cita “[...] el bien del delito precedente, la administración de justicia, [...] el orden económico y financiero, [...] el orden público, la seguridad interior [...] y la función preventiva de la pena prevista para los delitos graves previos de los que proceden los bienes cuyo origen ilícito se pretende ocultar”)* (CÓRDOBA, Fernando J., *“Delito de lavado de dinero”, Hammurabi, 2019, pp. 22/23.*” (CFed. Cas. Penal, sala 4ª, 22/09/2023, “S., A. y otros s/ recurso de casación”, c. nro. 1814/2017/TO2/CFC23).

Teniendo presente ambas posturas, entiendo que no es posible descartar de plano la afectación al bien jurídico protegido como pretende la defensa –ya sea que se considere que es unívoco o complejo–, pues si seguimos la postura mas amplia, tenemos que el juez a quo en principio identifica a los delitos de evasión fiscal y el narcotráfico como precedentes del lavado de activos, por lo que maniobras dirigidas a poner en circulación bienes producto de tales delitos, indudablemente perturban al sistema de justicia penal dificultando su eficaz operatividad respecto del crimen organizado.

Pero aún ante el supuesto que nos centremos exclusivamente en el bien jurídico macrosocial económico y financiero, tampoco ha de prosperar el planteo que minimiza la afectación que pudo haber tenido el actuar de Guerra, pues el legislador ha fijado un *“...indicador de cuantía (condición objetiva de punibilidad) que cumple precisamente la función de establecer cuándo nace el interés penal.”* (C.P., Marcelo Riquert –Director–, pag. 2286), es decir, que los bienes provenientes de un ilícito penal deben superar dicha condición objetiva.

Continuando con los restantes agravios, la defensa argumenta que el juez de la instancia anterior construye una relación comercial y societaria oscura y con ribetes de “testaferro” entre el encartado y su padre, cuando en realidad es de público conocimiento y con legal asiento que M. G. forma parte de la sociedad que administra el frigorífico “Silro” y que Roque Guerra es su titular, a tal punto que el primero se encuentra coimputado con su padre en la





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

investigación por evasión impositiva de esa firma, señalando el defensor que puede ser que ambos “...sean ciudadanos que no tributan ante el FISCO sus negocios jurídicos...” , pero alejando a su representado de la figura típica que se le endilga.

En este punto, considero que es necesario profundizar la investigación sobre el origen de los fondos con los que M.G. adquirió autos de alta gama y una propiedad lujosa -entre otros gastos- , siendo que en los órganos de control e impositivos no registraba actividad económica alguna que le permitiere alcanzar ese alto nivel de vida.

Muchos indicios acompañan la postura del juez de la instancia anterior en cuanto a que los fondos podían provenir de la evasión impositiva por la que fue condenado su padre, y que mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles, de moneda extranjera, gastos en viajes, préstamos de dinero, e incluso mediante la intermediación financiera no autorizada a través del cambio de cheques, M.G. perseguía que ese dinero de origen espurio ingresara en la circulación legal de bienes.

Tales marcadores, además de la incompatibilidad entre el alto nivel de vida que llevaba G. y la ausencia de ingresos lícitos justificados, estaban dados por su participación en diversas sociedades (“M.SA” -ex “S. S.A.”- desde 1998, “D. SRL” desde marzo de 20., “L. C. SA” y “F. M. SA”, muchas de ellas en el cargo de presidente) en las que su padre resultaría el verdadero director y aportante de los fondos. A ello se sumaban las autorizaciones otorgadas a R. G. para conducir los vehículos de alta gama que adquiría, los préstamos dinerarios a su madre y a su contador, etc.

Tal como adelantara, esas conductas fueron tenidas como indicios de la comisión del delito investigado, recordando que un indicio es un hecho que está en relación tan íntima con otro hecho, que de uno hecho el Juez llega hasta el otro por medio de una conclusión muy natural, por lo cual es menester en la causa dos hechos: el uno comprobado, el otro no manifiesto aun y que se trata de demostrar raciocinando del hecho conocido al desconocido (Mittermaier, Karl; “Tratado de la Prueba en Materia Criminal”, Tercera Edición, Madrid, IRL, pág. 360 y ss).



De igual manera, la eficacia de la prueba de indicios depende de la valoración conjunta que se haga de ellos teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues, por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad (CSJN, Fallos: 314:346), y con ello, ésta prueba refiere, como lo señalé antes “... un juicio de probabilidad o certeza, y constituye un elemento de convicción suficiente en el proceso penal, cuando ha sido debidamente interpretada...” (Cfr. CAcus. Córdoba, 09/10/1986 “López, Jorge O.”), “...no siendo necesario para el juicio de sometimiento del encartado al proceso que se haya comprobado por plena prueba sus responsabilidades en el hecho, bastando solamente que aquellos indicios sean lo suficientemente graves, precisos, y concordantes como para conformar dicha opinión provisoria” (ver Voto del Dr. Tazza en resolutorio de fecha 12/03/2015, expte. FMP 310144Q9/2Q07/7/CA1).

Y esos indicios, fueron considerados bastantes por el juez a quo para afirmar que se estaba frente a “...operaciones tendientes a legitimar bienes provenientes de un hecho ilícito anterior.” (ver Tazza, Alejandro; “Código Penal de la Nación Argentina Comentado. Parte Especial”, Tº III, Rubinzal-Culzoni, pág. 569), recordando que no era necesario que se encuentre acreditada de manera rotunda la existencia de la actividad ilícita de la que provienen los activos, habiendo determinado la Cámara de Casación al respecto que “...Se requiere por tanto, la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico, que permita la exclusión de otros orígenes posibles, no siendo necesaria la superación del plano indiciario, ya que la demostración plena de esos vínculos nos conduciría a la valoración de la conducta del presunto autor como una forma de participación en el delito antecedente -circunstancia ajena al delito en cuestión-...” (CNCP, Sala: I, Registro nº 8622.1., autos “Orentrajch, Pedro y otro s/recurso de casación”, del 21/03/06), norte en el cual se ha inscripto la jurisprudencia de esta Excma. Cámara Federal (Expte. N° FMP 32006228/2013/137).

Pero más allá de profundizar si los fondos utilizados pertenecían al padre del encausado o provenían de las defraudaciones al fisco por el cual está siendo investigado el propio Marcelo Guerra junto con su padre en otras causas -con lo que nos encontraríamos ante un supuesto de





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

autolavado-, entiendo que el juez a quo deberá sumar mayores elementos para justificar la existencia de la figura del art. 303 CP, que se presenta como *"...un delito complejo, integrado por varias 'fases' o etapas, que se estructura sobre un tramado por lo general enmarañado de procesos, negociaciones o actos jurídicos, tendientes a que los fondos o bienes obtenidos de cualquier hecho ilícito aparezcan como conseguidos legalmente o a través de actividades lícitas."* (Tazza, Alejandro, Código Penal de la Nación Argentina Comentado, Parte Especial, Tomo III, pag. 566).

En esa tarea se deberá tener en cuenta que *"Tres etapas diferentes han sido reconocidas en el proceso de lavado: una inicial o de 'colocación', en la cual la organización criminal dispone del producto de su actividad y obtiene su ingreso en el sistema financiero. Luego tiene lugar la etapa de 'estratificación', durante la cual se llevan a cabo el mayor número posible de transacciones, con la finalidad de impedir que pueda reconocerse, luego de todo el proceso, el arbitrio utilizado para la 'colocación'. Finalmente llega el momento de la 'integración': cuando puede disponerse de los fondos dentro del marco económico legítimo porque provienen –en lo inmediato– de actividades financieras que, en sí mismas, son lícitas"* (D'ALBORA, Francisco J., "Lavado de dinero", Ed. Ad-Hoc, 2011, Buenos Aires, pp. 14/15). (CNPenal Econ., sala B, 12/08/2022, "M., H. C. y otros s/ infr. art. 303 CP", c. nro. 411 /2015/32/CA2). De la misma manera, se ha dicho que la secuencia de actos tendientes a "lavar" el dinero y/o activos de origen ilícito *"...se sistematiza en tres etapas: la colocación (introducción de bienes ilegales en el sistema financiero sin llamar la atención), la transformación (traslado de fondos dentro del sistema financiero creando confusión y complicando la posibilidad de su seguimiento documental) y, finalmente, la de integración (mediante transacciones adicionales que crean la apariencia de legalidad)..."* (Riquert, Marcelo A.; "Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado", Erreius, pág. 2290).

Ahora bien, las constancias arrimadas a la causa, en principio dan cuenta de la adquisición de bienes a nombre propio por parte de Marcelo Guerra y con las anotaciones registrales correspondientes, por lo que en la hipótesis investigativa seguida por el juez instructor, no se advertiría mayor ardid que –en todo caso– el encartado hubiera adquirido bienes con el producido del delito por el que fue condenado su padre, para que no apareciera Roque Guerra haciendo uso de los beneficios obtenidos con sus



maniobras evasivas al fisco. Y no debemos olvidar que, por el contrario, “...el blanqueo de los capitales producto de hechos delictivos se caracteriza por ser una actividad criminal muy compleja, que se vale de un inagotable catálogo de técnicas o procedimientos en continua transformación y perfeccionamiento.” (Tazza, Alejandro, Código Penal de la Nación Argentina Comentado, Parte Especial, Tomo III, pag. 566).

Podría considerarse que mayor grado de complejidad conlleva la maniobra de creación de una sociedad comercial conformada en los papeles por M. G. y su hermana en la época en que su padre estaba siendo investigado como evasor, presumiendo que se incorporaron fondos de R. G., o en la intervención de M. G. ocupando cargos directivos en otras sociedades, cuando en realidad el titular sería su padre. También se puede considerar un ardid de mayor sofisticación, la facilitación de una cuenta bancaria “propia” de M. G. para que se manejaran fondos de una firma constituida por el padre.

Entiendo que sobre esos puntos en particular, podría profundizar el juez a quo, sin olvidar que también se detectó la emisión de una extensión de una tarjeta de crédito del encartado a nombre de una persona (V.P.) con el mismo número de DNI que su padre R. G. -lo que incluso podría dar lugar a la falsificación o uso de un documento público falso-. Por su parte, la emisión de sendas cédulas azules para autorizar a R. G. a conducir la mayoría de los autos que adquirió su hijo, nos ubican ante el escenario muy factible de que en realidad los compraba para su padre, maniobra que se presenta con un grado de obviedad que la aleja de la sagacidad en la elaboración de maniobras propias del lavado de activos.

Por ello también resultaría de utilidad traer a R. G. este proceso, si el juez a quo lo considera pertinente, por ser la persona que habría encomendado el lavado de activos a su hijo M., y a los fines de sumar elementos probatorios a la realidad histórica que el Juez a quo tiene por probada.

Otro de los aspectos en que el juez de la instancia anterior podría profundizar en procura de dirimir con mayor precisión el encuadre de las conductas investigadas, es el relacionado el requisito de que existan fuentes lícitas de generación de capitales con los cuales M. G. habría intentado





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

confundir el dinero proveniente de actividades ilegales de su padre, cuando el primero no registraba actividades lícitas que pudieren generar un ingreso suficiente que le permitiere lograr esa mixtura de capitales.

Al respecto, he de remarcar que estamos ante un tipo complejo, alternativo, que consiste en una serie de actos que tienen como objetivo disimular el origen delictivo o procedencia ilícita de las ganancias obtenidas por la comisión ilícitos antecedentes, intentando transformar la naturaleza ilícita del provecho material que se ha obtenido del crimen previo. Por lo tanto, el delito se verá configurado en su plenitud cuando se pueda asegurar y acreditar procesalmente que determinados bienes de origen delictivo han sido efectivamente puestos en circulación en el mercado con la consecuencia posible de ser confundidos como provenientes de fuentes lícitas.

Desde otro punto de vista, y como se mencionara *ut supra*, existe la posibilidad que parte de los activos que Guerra intentó convertir en legítimos, no provinieran de las ganancias ilícitas de su padre, sino que fueran producto de la posible evasión fiscal de las firmas que integró en cargo directivos; tenemos que con fecha 1... d.e j.de 2...0. el Congreso Nacional promulgó parcialmente la ley 26.683, que incorporó al Cód. Penal el Título XIII "Delitos contra el orden económico y financiero" -entre los que se encuentra el art. 303 donde se tipifica la conducta imputada a los recurrentes-, a fin de adecuar la tipificación de este tipo de delitos a las recomendaciones de la Financial Action T. F. on Money L. (GAFI), y así cumplir con la exigencia internacional de reprimir el "autolavado", pues anteriormente esta conducta se relacionaba con el encubrimiento, lo que demandaba que el autor del lavado no hubiera participado del ilícito penal anterior.

Ahora bien, además de la evasión fiscal como origen de los fondos a blanquear, el juez consideró que las conversaciones de G. con dos personas investigadas como miembros de una organización dedicada al narcotráfico (una de ellas luego absuelta), de las que surge que pactaba operaciones bancarias de descuento de cheques, permitían tener por suficientemente acreditado que el encartado conocía el origen delictivo de los



fondos de los cartulares que se le acercaban para el cambio en oficinas del frigorífico "S.", y mediante ese intercambio tenía la intención de aparentar un carácter legítimo de ese dinero.

Sin embargo, entiendo que también debería ahondarse la investigación sobre esa hipótesis, pues se desconoce si G. tenía conocimiento del origen de los fondos y si, por otra parte, efectuaba esas operaciones con habitualidad y de manera más genérica, con otras personas además de los arriba mencionados. El juez se ha centrado solamente en las transcripciones de las comunicaciones de los teléfonos investigados –por ser los usados por las personas vinculadas a la organización criminal–, lo que no significa que también pudieren existir conversaciones del mismo tenor con otras personas con actividades comerciales lícitas a las que cambiaba cheques; sin perjuicio que esa actividad de G. pudiere dar lugar a una nueva investigación sobre otro tipo de delitos, como la intermediación financiera no autorizada.

Por otra parte, en principio, resulta extraña la circulación de cheques en el marco de operaciones de comercio de estupefacientes, ya fuera en el intercambio entre el proveedor y quien luego comerciará la droga fraccionada, situados como los mas altos peldaños de una pirámide que finaliza con los consumidores, que tampoco suelen entregar cheques por las dosis que consiguen de su "dealer".

Sentado ello, observo que la apelante ha presentado un planteo de prescripción a modo de agravio en esta instancia, respecto de las conductas que el juez a quo tuvo como marcadores de lavado de activos y que habrían tenido lugar con anterioridad al 3 de n. de 20..

Coincidiendo con la postura del Fiscal de Cámara, entiendo que dicha argumentación deberá ser tratada en la instancia anterior a los fines de no privar a las partes de la posibilidad de apelación, debiendo remitirse a esos efectos y absteniéndome de efectuar consideraciones de fondo al respecto (el momento en que se verifica el lavado de activos, si se trata de un delito continuado, instantáneo, con efectos permanentes, etc.; así como el tema de la habitualidad en este tipo de delitos, entre otros puntos) que pudieren ser tenidas como adelanto de opinión, debiendo remitirse las actuaciones a la instancia anterior a los fines que se conforme el correspondiente incidente de





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

prescripción de la acción penal, debiendo analizarse el pedido de la parte y evaluarse la existencia de eventuales suspensiones y/o interrupciones del curso prescriptivo (arg. art. 67 del CP).

En función de lo expuesto y siendo que los jueces no están obligados a seguir todos y cada uno de los agravios expresados, sino a atender a aquellos que estimen conducentes para resolver la cuestión debatida (Fallos: 311:340; 322:270; 329:3373; 331:2077), en razón de los argumentos informados, propongo al Acuerdo **REVOCAR** el resolutorio recurrido, dictando la falta de mérito de M. G. en orden al delito por el que fuera procesado, debiendo remitirse las actuaciones a la instancia anterior a los fines que se conforme el correspondiente incidente de prescripción de la acción penal conforme lo arriba mencionado (arts. 306, 449, ss. y ctes. del CPPN).-

**Tal el sentido de mi voto.-**

**El Dr. Alejandro Osvaldo Tazza dijo:**

Que he de coincidir con la solución propiciada por mi colega que me precede, en razón a compartir los fundamentos que informan su voto.

Solo me permito formular algunas apreciaciones en torno de la profundización de la investigación que propugna en tal sentido.

### **I.- De la prescripción deducida.**

Al respecto debo referir que más allá de que se trata de una cuestión de orden público y que este Tribunal podría disponerla de oficio cuando se constate una situación que así lo amerite, debemos recordar que el Sr. Juez de la Primera Instancia es quien se encuentra en mejores condiciones para establecer si se presentan los requisitos y exigencias que la normativa penal establecen para tales supuestos, y porque de tal manera se garantiza la doble instancia judicial, situación que me hace coincidir con la propuesta del distinguido colega que me precede en este Acuerdo.



En efecto, no olvidemos que la decisión de la primera instancia imputa al procesado M. G. la presunta comisión de lo que considera 5 (c.) hechos constitutivos del delito de lavado de activos.

Teniendo en cuenta los planteos formulados en este expediente y a tenor de las fechas de la presunta comisión delictiva y su eventual significación económica, un primer aspecto que debe ser abordado en aquella instancia es el referido a la posible prescripción de las conductas atribuidas al encartado, pues algunas de ellas aparecerían “prima facie” siendo cometidas mucho más allá del plazo máximo de prescripción contenido en el art. 62 del Código Penal, lo que debe analizarse en forma primordial al avance de la investigación en curso.

Para tal objetivo será necesario establecer si el delito de lavado de activos constituye un ilícito de carácter instantáneo, o si por el contrario asume las características de los llamados delitos permanentes o “continuos”, debiendo evaluarse, en su caso, si aquellos “5 h.” que se le imputan al encartado representan una misma unidad de acción o, de adverso, configuran una pluralidad de acciones cada una de ellas representativa de una tipicidad individual y autónoma, lo que lógicamente tendría incidencia en la configuración del agravante de “habitualidad” que también se le endilga al encartado por la realización de tales conductas, y eventualmente en establecer la ley aplicable en el tiempo a la luz del principio de la aplicación de la ley más benigna para el inculpado.-

**a). Naturaleza del delito:** En este primer aspecto será trascendental que el Juez se pronuncie acerca de la naturaleza del delito de “lavado de activos”, para definir si nos encontramos frente a un delito cuya acción se perfecciona con la realización de la conducta típica (instantáneo), o si por el contrario la violación jurídica sigue realizándose a través del tiempo, otorgando “permanencia” a dicha ilicitud (permanente o continuo), más allá de la dificultad consistente en la ausencia de un consenso jurisprudencial o doctrinario que pueda definir tajantemente la cuestión, y en el que las hipótesis ensayadas no son pacíficas en su totalidad a la hora de establecer una u otra categorización.





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

En efecto, la discusión se plantea en torno a que mientras que en los delitos permanentes el estado jurídico ilícito creado por el autor debe ser mantenido en el tiempo y puede hacerlo cesar por su propia voluntad, en los delitos instantáneos –por el contrario- el perfeccionamiento de la ilicitud coincide con la realización de la conducta típica, aunque el estado jurídico así creado se mantenga en el tiempo, pero ya no dependiendo aquel mantenimiento o su cese por la voluntad del agente comisivo.

No debe confundirse esta clase de hechos delictivos con el *delito continuado*, en el cual el autor lleva a cabo varias violaciones jurídicas, por lo general sucesivas y simultáneas tendientes a un único resultado, exigiéndose por ello –entre otros indispensables requisitos- la unidad de resolución o dolo, que en principio no aparecería configurada en esta investigación criminal con los elementos probatorios hasta aquí recolectados en la causa.

La más calificada doctrina –a mi juicio- para resolver esta disyuntiva, sostiene que en estos casos conviene recurrir al “verbo definidor” del delito de que se trate (*ver Núñez, Ricardo, “Tratado”, II, 254*). En igual sentido se pronuncia Soler (*Soler, Sebastián, Tº I, Tea, 1953, p. 273 y ss.*), remarcando la importancia del “verbo relevante”, advirtiendo además que deben ser cuidadosamente distinguidos los delitos instantáneos de efectos permanentes, con aquellos verdaderos delitos permanentes “en los cuales lo que permanece no es un mero efecto del delito, sino el estado mismo de la consumación”.-

De todos modos tales afirmaciones se complejizan en supuestos como en el caso del lavado de dinero, pues el tipo penal se halla configurado por una serie de conductas dispuestas de modo alternativo y en las cuales cada una de ellas es constitutiva de la modalidad delictiva de lavado o blanqueo de capitales.

Ello dificulta en cierta forma la categorización de la figura como delito instantáneo o permanente, aunque de seguirse las enseñanzas de Núñez o de Soler, debería tenerse en cuenta que las acciones descriptas en el tipo penal culminan con la expresión “*o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado*”, con lo que no cabe duda que las conductas anteriormente reseñadas en la figura (convertir, transferir, administrar, vender, gravar, adquirir o disimular), no son sino formas de “poner en circulación en el



mercado” los bienes o activos de procedencia ilegítima, y siempre en la medida en que se compruebe la existencia de los restantes elementos típicos de la figura, de lo que me ocuparé oportunamente.-

**b). Habitualidad.** Estrechamente enlazado con lo anteriormente expuesto, la resolución a la que se arribe tendrá relevancia respecto del agravante que se le atribuye al imputado de autos. En efecto, pese a la deficiente redacción típica otorgada a esta ilicitud, el legislador argentino ha previsto que la “habitualidad” constituya un agravante de la figura básica. Conforme a ello, si el legislador ha considerado como un agravante la habitualidad en la comisión de tales hechos, es porque habría entendido que la figura básica no era constitutiva de lo que se conoce con el nombre de delito permanente.

Lógicamente lo permanente es incompatible con la habitualidad. No podría haber habitualidad en un delito permanente. En tal aspecto coincido con Zorzuelo Suárez cuando afirma que “habitualidad y delito continuado resultan incompatibles y excluyentes entre sí” (Zorzuelo Suárez, Santiago, “Delitos contra el orden económico y financiero – III, Rubinzal-Culzoni, 2016, pag. 202).

Siendo así, configuraría un contrasentido o un razonamiento irracional considerar que cuando un suceso delictivo referido a un delito permanente (continuo) -en un mismo contexto de unidad de conducta- pueda ser agravado por habitualidad en su comisión, puesto que ello implicaría castigar penalmente al autor del hecho dos o más veces por la misma conducta.

Únicamente la habitualidad como agravante podría tener sentido si la figura básica es constitutiva de un hecho ilícito considerado como delito instantáneo y perfectamente completo al momento de su comisión. Su repetición en distintas oportunidades ahora sí podría dar lugar a la habitualidad reclamada por la circunstancia agravante.

Por tanto, habría que analizar si el legislador agravó la conducta de lavado de activos por habitualidad es porque consideró que el delito básico se perfeccionaba de modo instantáneo, y que su repetición merecía mayor reproche punitivo -aun en los casos en que pueda ser considerada tal exigencia





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

como un elemento anímico del tipo penal-, o si ello puede ser abordado desde la perspectiva de cada una de las modalidades típicas utilizadas en las circunstancias particulares de cada caso.

En consecuencia, será tarea de la Instrucción determinar en primer término si las acciones desplegadas por el imputado configuran un supuesto de delito instantáneo, permanente, o eventualmente continuado, para luego establecer si en base a ello se podría aplicar la agravación por habitualidad que reclama el articulado respectivo.

#### II.- De la figura del lavado de activos.

Creo aquí necesario formular alguna sintética aclaración respecto de los requisitos exigidos por la figura básica del lavado de activos previsto por el art. 303 de nuestro Código Penal, ya que incluso para algunos destacados autores la figura es inoportuna y responde exclusivamente a la mentalidad de una clase burócrata afincada en organismos al estilo GAFI, que confunden los fines preventivos, políticos y policiales en la lucha contra la criminalidad organizada con la función del Derecho Penal (*Bajo Fernández, Miguel "La perplejidad del intérprete ante el blanqueo de capitales: límites del concurso real y alcance de la acción", cit. por Donna, Sebastián Alberto, en "El problema del delito precedente en el tipo penal del artículo 303 del Código Penal Argentino", publ. en "Lavado de activos, blanqueo, decomiso y constitucionalidad de la extinción de dominio - I", Ed. Rubinza - Culzoni, Sta. Fe, 2022, pag. 13 y ss.*), por lo que en tal sentido la figura debe ser interpretada de modo cauteloso y restrictivo, afirmación que en este último aspecto comparto plenamente.-

Es que como bien señala Pablo L. Emlek, "la evolución del tipo penal de blanqueo de capitales en Argentina parece ubicarnos en el extremo en que casi todo es lavado" (*Emlek, Pablo L. "Habrá llegado la hora de racionalizar el tipo penal de lavado de dinero?", publ. en "Lavado de activos, blanqueo, decomiso y constitucionalidad de la extinción de dominio - I", Ed. Rubinza - Culzoni, Sta. Fe, 2022, pag. 79*).

Partimos de la base de que no toda disposición del dinero o del bien que es producto de un ilícito previo es configurativo del delito de lavado de dinero. En esta línea de pensamiento hay que ser muy claros, y por tanto la



situación merece una mayor explicación para así poder diferenciar lo que podría ser una conducta configurativa de un delito de encubrimiento, de un ilícito de blanqueo de capitales, de otra figura ilícita, o simplemente de un hecho totalmente impune.

Luego de una serie de acciones ejemplificativas expuestas en la norma, el tipo penal del art. 303 del Código Penal culmina con la expresión “o de cualquier otro modo pusiere circulación en el mercado” los bienes o activos provenientes de un ilícito, con la consecuencia posible de que el origen de los mismos adquieran apariencia de legalidad.

Por lo tanto, no cabe duda que no cualquier conversión, transferencia, administración, venta, gravamen, adquisición o disimulación son conductas típicas, sino solo y exclusivamente en la medida en que tal acción *implique una puesta en circulación en el mercado* de bienes o activos de procedencia ilícita, y siempre y cuando exista la consecuencia posible de que adquieran apariencia de legalidad y el monto de aquellos superen el mínimo legal allí establecido.

En este sentido se ha sostenido que “el delito de lavado no se satisface con la realización de alguno de los actos jurídicos enumerados en la norma, sino que las alternativas negociales allí expresadas configuran posibles modos de puesta en circulación de bienes...procurándose así dotarlos a esos bienes de apariencia lícita” (ver “Galindo, Juan Carlos León y otros s/Procesamiento y embargo”, Cam. Crim y Correc. Fed. Sala 2, del 30-9-21, citado por Berruezo, Rafael, “Límites a la extensiva interpretación del delito de lavado de dinero”, publicado en “Lavado de activos, blanqueo, decomiso y constitucionalidad de la extinción de dominio – I”, Ed. Rubinzal – Culzoni, Sta. Fe, 2022, pag. 35 y ss.).

Con criterio acertado que plenamente comparto, se sigue allí afirmando en el voto del Dr. Boico, que “el autor necesita desplegar eventos o estrategias para que esos bienes ilícitos ingresen al tráfico lícito, aunque necesita también ocultar su génesis delictiva. Entonces el tema no se sacia tan sólo con introducirlos al circuito lícito, sino hacerlo como si fueran de origen lícito, o dicho de modo contrario ocultando su procedencia ilícita. De eso se





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

trata el lavado. Por caso, la mera adquisición de bienes con dineros malhabidos no constituye el delito de lavado, pues así no se lava nada” (ver Berruezo, Rafael, y precedente citado anteriormente).

Para esta finalidad el autor debe *haber desarrollado alguna estrategia, algún acto de “camuflaje”, desplegar eventos, o aplicar un plan de “enmascaramiento”* para dotar al bien de una calificación de licitud de la que antes carecía (cit por Berruezo, ídem anterior).

En definitiva, para que exista objetivamente el delito de lavado de activos, es necesario que el autor “despliegue alguna conducta orientada a alterar el origen de los bienes”, que debe materializarse con evidencias concretas que así lo demuestren (del voto del Dr. Irurzum en el fallo de la Cámara Federal anteriormente citado).-

En tal sentido *no debe confundirse la utilización de tales beneficios ilícitos -que a lo sumo podrán considerarse el producto o “provecho” del delito-* con las complejas operaciones que definen al delito de blanqueo de capitales ilícitos, caracterizadas por la “simulación”, la “ocultación”, el “enmascaramiento” o la disimulación, orientadas subjetivamente a crear una falsa apariencia de legalidad a los fondos de origen espurio.

Tampoco debemos confundir el delito de lavado de dinero con un posible acto de *encubrimiento*, en tanto en estos casos *el encubridor actúa adquiriendo, recibiendo o asegurando o ayudando al autor o partícipe del delito anterior a asegurar el producto o provecho de un determinado ilícito*

Se requiere pues, objetivamente, que la acción tenga aquella entidad, ya que como sostuviera en otro precedente de este Tribunal “el delito de lavado de dinero o de blanqueo de capitales consiste básicamente en la realización de una serie o entramado de conductas orientadas a *“dar apariencia de legalidad”* a dinero o bienes que provienen de una actividad delictiva precedente.

Si bien no se reclama que el autor haya logrado el objetivo de “confundir” sobre la naturaleza y origen de los bienes o activos involucrados, es necesario que todas las acciones aquí previstas, para ser consideradas típicas en términos de blanqueo de dinero, *deben tener aptitud e idoneidad suficiente como para engañar sobre su origen*, o dar una falsa apariencia de legitimidad,



además de haber sido emprendidas volitivamente por el autor procurando obtener dicho propósito.

Este último aspecto, de carácter subjetivo, debe estar presente en la línea de investigación pues representa la voluntad de realizar alguna de las acciones previstas por el tipo penal inspirado en esa idea de confundir acerca del origen de los fondos, algo que es requerido incluso hasta por las Convenciones Internacionales que dan origen a esta figura penal (de *propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes*”, habla la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional –Ley 25.632-, y “*con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes*”, refiere la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988).

Y tal como dice el fallo de la Cámara Federal porteña antes reseñado, lo que el legislador castiga es la maniobra cuya finalidad persiga apariencia de legalidad, sin interesar si se consigue dicho resultado (*del voto del Dr. Boico en precedente citado*).

Ambas aristas, tanto objetiva como subjetiva, deben verse reflejadas aunque sea indiciariamente en el curso de la investigación con evidencias concretas de su materialización, para así poder presumir fundadamente en la efectiva presencia de los gérmenes existenciales de esta ilicitud.

### **III.- Las imputaciones por lavado de dinero en el caso concreto.**

Conforme lo que surge de la Instrucción de esta causa, se investigan aquí la presunta comisión de cinco (5) hechos diferentes posiblemente constitutivos del delito de lavado, y que conforme a tal número y repetición de conductas ilícitas mereció ser agravado por la habitualidad y reiteración de su comisión (arts. 303 inc. 1 y 2 “a” del Código Penal).

Así las cosas, el suceso identificado como **Hecho número 1** según la instrucción, consistente en haber efectuado el encartado depósitos bancarios a su nombre por un importe de \$1....0..., que habría ocurrido entre los meses de F. a J. del año 2..





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

El **Hecho nro. 2**, estaría conformado por acreditaciones bancarias existentes en la cuenta corriente del Banco G. a nombre del imputado por importe de \$ 4.4., que datan desde el mes de E. a O. de 2..

El **Hecho nro. 3**, representado por la adquisición de moneda extranjero en el período 20. a 20. por un monto total de pesos c. d. m.q.c.y n.\$ 117.559.-

El **Hecho nro. 4**, constituido por la diversa adquisición de automóviles y motovehículos detallados en el pronunciamiento cuestionado, desde el año 2. hasta el 20., y finalmente,

El **Hecho nro. 5**, consistente en la compra con dinero en efectivo de un inmueble sito en calle A.4. de esta ciudad, cuyo importe fuera abonado por el mismo M. G. en su totalidad el día 1. de f.de 2. según informe de Actuación Notarial GAA 1..., elaborado por la notaria P.C., independientemente de la fecha de formalización de la respectiva escritura traslativa de dominio.

En torno a esta situación coincido con mi colega que, más allá de analizar la posible prescripción de alguno de los “hechos” mencionados, será tarea de la instrucción la de delimitar concretamente aquellas maniobras que puedan ser considerados como verdaderos actos de lavado, para lo cual cobrarán especial relevancia las apreciaciones antes formuladas, debiendo acreditarse con el grado de probabilidad que exige esta instancia que el autor haya desplegado maniobras de ocultamiento del origen de los fondos utilizados, o haya empleado subterfugios o utilizado artilugios tendientes a disimular la procedencia aparentemente ilícita de los activos involucrados, que los mismos se hayan introducido efectivamente en el mercado, y el autor haya obrado con aquella finalidad de darle a tales bienes una apariencia de licitud a través de acciones idóneas y capaces de lograr tal objetivo.

Nuestro tipo penal no exige el efectivo resultado, sino que le basta la mera posibilidad de que suceda, pero lo que sí exige con total certeza y meridiana claridad es que esos bienes o activos hayan sido puestos en circulación en el mercado de capitales, bienes o servicios.

Por ende, el delito de lavado de activos se verá configurado en su plenitud cuando se pueda asegurar y acreditar procesalmente que



determinados bienes de origen delictivo han sido efectivamente puestos en circulación en alguno de esos mercados, con aquella consecuencia posible de ser confundidos como provenientes de fuentes lícitas, lo que hasta ahora aquí no aparece debida y procesalmente configurado. Lo que debe comprobar en debida forma la instrucción a fin de no caer en el grueso equívoco de confundir tipos penales, es la existencia de aquellas maniobras o artilugios que son característicos de esta figura penal, señalar el contexto histórico y circunstancial en que se produce la efectiva “puesta en circulación”, y explicar debidamente de qué modo eso puede llevar a la “consecuencia posible” de dar apariencia de legítimos a tales bienes o activos, amén de indicar aquellos indicios que aseguren su correspondencia con el aspecto subjetivo del tipo penal analizado.

Una pauta a tener en cuenta en este aspecto es que “el simple hecho de comprar algo o usar dinero supuestamente malhabido no convierte al hecho en un supuesto de “lavado” de capitales, pues una interpretación respetuosa del texto constitucional exige, en cualquier modalidad de lavado...que esa cosa obtenida por el ilícito ajeno o propio, si es que hay propósito de introducirla al circuito lícito como lo indica la ley penal, se desconecte completamente del mero uso y goce de lo criminalmente obtenido y se emprenda una acción totalmente distinta y novedosa a la que constituiría la mera tenencia y disfrute de lo ilícitamente obtenido”; y es por ello que “disfrutar del provecho económico del delito precedente requiere, para quien procura lavar activos, un acto de integración, una estrategia introductiva al sistema económico a través de un proceso más o menos sofisticado de ocultamiento de la ilicitud de origen” (*Ver Berruezo, Rafael, ob. y fallo citado*).-

Si bien como acertadamente señala el Sr. Fiscal General ante esta Cámara Federal de Apelaciones, que la ausencia de ingresos lícitos justificados por parte de M. G. la compraventa de rodados, la adquisición de inmuebles y los gastos suntuosos se presentan como indicios de una eventual configuración del delito, lo cierto es que tales indicadores no nos llevan de por sí a una presunción legal que “prima facie” pueda tener por acreditado con la certeza que reclama esta etapa procesal aquella premisa reveladora de ilicitud. Ello por cuanto los llamados gastos suntuosos son ni más ni menos como su nombre lo indica: gastos. En este sentido vale recordar que “es difícil sostener que un





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

individuo pudiera “lavar” dinero al gastarlo o en la compra de productos o pago de servicios asociados en forma más o menos directa a su existencia (*ver Emlek, Pablo, ob. cit., pag. 97*).

Por lo demás, y como bien se afirma en el voto de mi colega que me precede en este Acuerdo, la falta de justificación de ingresos por parte del imputado, la adquisición de moneda extranjera, o el hecho de depositar dinero en cuentas en entidades bancarias a su propio nombre al menos generan dudas acerca de la finalidad de hacer aparecer como lícitos aquellos activos, pues de ser así seguramente se habrían utilizado otras maniobras o mecanismos tendientes a disimular su presunto origen espurio.

Que tales activos no tengan justificativo en actividades comerciales lucrativas no llevan de por sí a la conclusión de que se trata de una conducta configurativa de lavado de activos, ya que en todo caso podría deducirse de igual modo, que ha existido una presunta evasión de tributos (propia, de su padre o la empresa de la que formaba parte), o de otra actividad de la que debería la instrucción demostrar su presunta ilicitud (v.g. evasión o elusión de tributos).

También debería profundizarse la investigación respecto de la autoría en el delito de lavado de activos, ya que en principio surgiría del pronunciamiento recurrido que M. G. habría incurrido –según la instrucción– en el delito mencionado por aquellas acciones, sustentadas en la utilización de supuestos fondos ilícitos que provendrían tanto de actividades ilícitas realizadas por su padre R. como a la vez del “cambio de cheques” que le fueran ofrecidos y entregados por dos sujetos involucrados en una causa de estupefacientes que tramitara en esta jurisdicción de la ciudad de M. del P..

En cuanto al primer supuesto no queda bien claro si el imputado M.G. habría operado de modo tal de “lavar” esos fondos que presuntamente provienen de aquellas ilicitudes que habría cometido su padre R. (conforme testimonio de sentencia condenatoria en 20.), con lo que lo que de ser así, hubiera correspondido también traer a proceso (en la calidad de intervención que se entienda corresponder) a quien habría proveído tales fondos y encargado el blanqueo a su hijo M. G.. Caso contrario tendríamos a alguien que es imputado de operaciones de lavado, pero paralelamente y fuera del proceso,



a quien sería quien encargó la realización de tales maniobras. La autoría -en esta instrucción- se advierte que está limitada parcialmente a uno de los extremos de la relación que fundamenta la imputación penal del delito de lavado de activos, lo que por tal motivo luce en apariencia huérfana de completitud en tal sentido. Por otro lado sería aconsejable profundizar ese aspecto, ya que si R. G. fue condenado por tales delitos podría determinarse si le fueron decomisados los fondos y bienes de su pertenencia, ya que de adverso debería presumirse que los activos que habría facilitado a su hijo provienen de una especie de “botín oculto” que habría escapado en aquel momento a las investigaciones de la justicia. Por ende es que coincido con mi colega en que resultaría conveniente profundizar este aspecto relativo al denominado “delito precedente” y la identificación de la fuente dineraria respectiva.

Por otro lado en la resolución cuestionada se hace alusión a sociedades comerciales compuestas -entre otros integrantes- por el mentado M. G., sin que se aclare tampoco si su actividad comercial originaba ingresos legítimos, o si por contrario el sindicato o eventualmente la sociedad serían la fuente de la procedencia activos sospechosos o si estas últimas podrían aparecer como otro sujeto activo de la ilicitud investigada (ver art. 304 del CP).-

En lo relativo al segundo supuesto (cambio de cheques) a dos individuos que aparecerían involucrados en el comercio de estupefacientes y lavado de activos (aunque uno de ellos en la causa formada al respecto fuera absuelto por retiro de la acusación fiscal -L., mientras que el otro nombrado -I. O.- se encontraba prófugo en aquel momento y actualmente decidiéndose su situación procesal en otra causa en esta misma jurisdicción), deberían formularse algunas precisiones respecto del origen de tales fondos tal como lo propicia mi colega. Independientemente de ello, será necesario analizar si el “cambio de cheques” constituye una maniobra que pueda ser entendida como una operación que pone en circulación activos provenientes de un ilícito precedente y que conlleve la consecuencia posible de que aparezcan así, como fondos lícitos.

En efecto, primer lugar, y en ese orden de ideas, habría que acreditar aunque sea mínimamente, que los supuestos involucrados en el





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

comercio de drogas cobraban en cheques por la venta de estupefacientes o se hacían de ellos por alguna operatoria diferente, y que luego para disimular su origen, se los habrían cambiado a alguien (M. G.), quien sabiendo de su procedencia ilícita, contribuía de tal modo a poner en circulación el dinero expresado, colaborando así en darle apariencia de origen lícito a los fondos que los cambistas obtenían. Es más, habría que preguntarse en esa situación quién sería el autor del delito de lavado, es decir, si quien entrega el cheque para convertirlo en efectivo o si quien dispone del efectivo para su cambio, o en su caso, si lo serían ambos extremos de la relación. Quizás hubiera sido adecuado hacer el seguimiento o trazabilidad de esos cheques para continuar con la pesquisa de la ruta seguida por el cartular, y determinar si fueron depositados por el adquirente o entregados a un tercero, si fueron dados en parte de pagos parciales o totales, o en fin, conocer el destino otorgado a tales instrumentos de cambio.

Párrafo aparte merece la consideración de estas maniobras de descuentos informales de cheques como constitutivas del delito de intermediación financiera (art. 310 CP) que se menciona en el procedimiento recurrido, máxime cuando este Tribunal ya ha tenido oportunidad de señalar que la figura de intermediación financiera se trata de un delito que se compone de dos actos positivos que deben darse conjuntamente para tener por configurada la acción típica, donde es exigencia legal e ineludible el cumplimiento de ambos. Por una parte, una captación inicios de recursos financieros, y por la otra, la colocación de esos recursos bajo la forma de otorgamiento de préstamos de esos fondos, bajo cualquier modalidad de transferencia con pacto de devolución. Si faltare uno de ellos no existirá delito en tales términos, y la atipicidad será su consecuencia.

Nada de eso aparece plasmado en la instrucción, que solo se ha limitado a mencionar el hecho como un supuesto de lavado de dinero, sin que por el momento se hayan acreditado al menos provisoriamente los extremos objetivos y subjetivos de la figura penal que aquí se investiga, situación ante la cual no corresponde otro pronunciamiento que el propugnado por el ilustrado magistrado que me precede en este Acuerdo.



#### **IV.- La interpretación normativa.**

No obstante lo expuesto anteriormente, es de destacar que los magistrados actuantes han realizado una inculdicable e intensa tarea en la búsqueda de la verdad judicial, en la que han debido efectuar incommensurables esfuerzos interpretativos frente a un defectuoso texto normativo que carece de una depurada técnica legislativa, y que aunque algunas voces lo señalan como producto de las presiones intentadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), vale señalar que es deber de los jueces darle el correcto alcance y contenido a la norma actuando con suma prudencia y máximo criterio restrictivo, pues la misión de la judicatura no es avalar ciegamente recomendaciones o notas explicativas provenientes de organismos internacionales (*que por otra parte genera obligaciones para los Estados pero a reserva de sus principios constitucionales y los conceptos fundamentales de sus ordenamientos jurídicos* (ver art. 3. pto. 1 "c" de la Convención Internacional contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobada por ley 24.072, y art. 6 pto. 1 de la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por ley 25.632), sino ser fiel custodio en el irrestricto respeto a las garantías constitucionales consagradas por nuestra Carta Magna y los Tratados Internacionales incorporados a su texto, procurando que los ciudadanos que habitan nuestro país no se vean sometidos a exigencias o condicionamientos de ninguna índole que puedan restringir la plena vigencia y libre disfrute de aquellos postulados que emanan de nuestra Ley Fundamental, y a los que debemos someternos incondicionalmente en el marco de un estado democrático de derecho.

Con estas aclaraciones, reitero que comparto las observaciones de mi distinguido colega que me precede en el voto al igual que los sólidos fundamentos en los que sustenta lo que entiendo una acertada posición, debiéndose consecuentemente revocar el auto recurrido y devolver las actuaciones a la instrucción para la profundización de la investigación en curso, para lo cual deberá tenerse en consideración los alcances expuestos en los apartados anteriores.

**Tal es mi voto.-**





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

En virtud del acuerdo que antecede, este Tribunal Resuelve:

**I) REVOCAR** el resolutorio de fecha 08/03/2... por el que se dispuso decretar el procesamiento sin prisión preventiva de M. R.G. como autor "*prima facie*" del delito de Lavado de Activos agravado por la habitualidad, previsto y penado por el art. 303 del CP, inc.1 e inc. 2 a) del CP (conf. Arts. 306 y 310 del CPPN) y mandar a trabar embargo sobre los bienes y /o dinero del nombrado, hasta cubrir la suma de \$ 8.3..2..0.; y **DICTAR LA FALTA DE MERITO** tanto para procesar como para sobreseer al nombrado en orden al delito señalado, debiendo remitirse las actuaciones a la instancia anterior a los fines que se conforme el correspondiente incidente de prescripción de la acción penal conforme lo arriba mencionado (arts. 306, 309, 449, ss. y cctes. del CPPN).-

**PROTOCOLICесе, NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y DEVUÉLVASE.-**

NOTA: Se deja constancia que la vocalía de este Tribunal se encuentra vacante (Art.109 RJN).-

